DIPUTACIÓN Đ ZARAGOZA

TRIBUNAL CALIFICADOR

El tribunal calificador de la convocatoria para la cobertura por oposición, en turno libre, de diez plazas de Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Zaragoza, correspondientes a la oferta de empleo público de 2025, de la que se dio publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 68, de 25 de marzo de 2026, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2026, ha acordado:

PRIMERO.- Hacer público el cuestionario de preguntas y respuestas del primer ejercicio de la oposición:

1. Según el artículo 9.3 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes principios está expresamente garantizado en la norma fundamental?
a) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.
b) La jerarquía normativa, la publicidad de las normas y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
c) La discrecionalidad absoluta de los actos de la Administración.
d) La supletoriedad del Derecho autonómico respecto al estatal.

2. ¿En qué supuesto puede el Gobierno dictar un Decreto Legislativo?
a) En casos de extraordinaria y urgente necesidad.
b) Cuando las Cortes Generales delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81 de la Constitución.
c) Cuando el Tribunal Constitucional anula una ley previa.
d) Siempre que el Presidente del Gobierno lo considere oportuno por razones de eficiencia.

3. ¿Qué materia NO está reservada a Ley Orgánica según el artículo 81.1 de la Constitución Española?
a) El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
b) La aprobación de los Estatutos de Autonomía.
c) El régimen electoral general.
d) La regulación del procedimiento administrativo común.

4. El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos establece que:
a) Un reglamento de rango superior puede derogar a otro de rango inferior.
b) Una resolución administrativa de carácter particular no puede vulnerar lo establecido en una disposición reglamentaria de carácter general, aunque proceda de un órgano igual o superior al que dictó la norma.

c) Los reglamentos pierden su vigencia automáticamente transcurridos cuatro años desde su aprobación.
d) La Administración no puede modificar una ordenanza sin la aprobación unánime del Pleno.

5. Cuando un órgano jurisdiccional aprecia que un reglamento contradice una ley deberá:
a) Aplicar preferentemente el reglamento por ser una norma más específica.
b) Plantear cuestión de inconstitucionalidad.
c) Suspender el procedimiento hasta que el Parlamento modifique la ley.
d) Inaplicar el reglamento por ser contrario a la ley y al principio de jerarquía normativa.

6. En relación con la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, señale la respuesta correcta:
a) Puede aprobarse mediante una ley ordinaria de las Cortes de Aragón.
b) Puede modificarse por acuerdo del Gobierno de Aragón.
c) Requiere seguir el procedimiento previsto en el propio Estatuto y su aprobación mediante Ley Orgánica de las Cortes Generales.
d) Basta con un referéndum autonómico.

7. El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye al Justicia de Aragón, entre otras funciones:
a) Resolver los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes autonómicas.
b) Dirigir el Ministerio Fiscal en Aragón.
c) Velar por la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas aragonesas en los términos previstos en el Estatuto.
d) Ejercer el control jurisdiccional sobre los actos del Gobierno de Aragón.

8. El artículo 141.1 de la Constitución Española establece un régimen específico para la alteración de los límites provinciales. Señale la afirmación correcta:
a) La alteración de los límites provinciales podrá acordarse mediante ley ordinaria cuando exista conformidad de las diputaciones afectadas.
b) La modificación de los límites provinciales corresponde a la Comunidad Autónoma, mediante ley aprobada por su Parlamento.
c) Cualquier alteración de los límites provinciales deberá ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, con independencia de la Comunidad Autónoma afectada.
d) La alteración de los límites provinciales puede acordarse mediante Real Decreto cuando responda a razones de interés general.

9. La principal diferencia entre el principio de legalidad aplicable a los particulares y el que rige la actuación administrativa consiste en que:
a) Ambos están sometidos al mismo régimen jurídico, pudiendo realizar cualquier actuación que no esté expresamente prohibida por la ley.
b) La Administración únicamente necesita una habilitación legal cuando ejerce potestades sancionadoras.

c) Mientras que los particulares pueden actuar libremente salvo prohibición legal, la Administración necesita una previa atribución competencial o potestad conferida por el ordenamiento jurídico para actuar válidamente.
d) La Administración puede actuar libremente cuando persigue el interés general, aunque no exista una previsión normativa expresa.

10. Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, las prerrogativas o potestades de las Administraciones Públicas encuentran su justificación en que:
a) Permiten a la Administración actuar con una posición de superioridad sobre los ciudadanos para garantizar el cumplimiento de sus decisiones.
b) Son facultades que corresponden a las Administraciones Públicas por el mero hecho de tener personalidad jurídica.
c) Son facultades que el ordenamiento jurídico atribuye a las Administraciones Públicas para la consecución del interés general, debiendo ejercerse siempre con sometimiento a la ley y al Derecho.
d) Solo pueden ejercerse cuando la Administración actúa mediante contratos o procedimientos sancionadores.

11. La Ley de Administración Local de Aragón configura las relaciones entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales sobre la base de los principios de:
a) Jerarquía, dependencia y tutela administrativa.
b) Coordinación, supremacía y sustitución.
c) Coordinación, cooperación, asistencia, información mutua y respeto de los ámbitos competenciales respectivos.
d) Desconcentración, delegación y dependencia funcional.

12. En el caso de deudas tributarias liquidadas por la Administración, el período ejecutivo se inicia:
a) Cuando se dicta la providencia de apremio.
b) Al notificarse la liquidación tributaria.
c) Al día siguiente del vencimiento del plazo establecido para su ingreso, si la deuda no ha sido satisfecha.
d) Una vez embargados los bienes del deudor.

13. Un Ayuntamiento de escasa capacidad económica y de gestión considera que no dispone de medios suficientes para desarrollar eficazmente la gestión y recaudación de sus tributos. Conforme al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale la afirmación correcta:
a) La gestión y recaudación de los tributos municipales corresponde exclusivamente al Ayuntamiento y no puede atribuirse a otra entidad.
b) El Ayuntamiento únicamente podrá solicitar que dichas funciones sean asumidas por la Comunidad Autónoma.
c) El Ayuntamiento podrá delegar el ejercicio de estas funciones en la Diputación Provincial, conforme a lo previsto en la legislación aplicable.
d) La Diputación Provincial solo podrá colaborar materialmente, pero nunca ejercer funciones de gestión o recaudación tributaria.

14. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres obliga a los poderes públicos a:
a) Aplicar medidas de acción positiva en todas sus actuaciones, con independencia de que exista o no una situación de desigualdad.
b) Garantizar que todos los órganos colegiados estén integrados exactamente por un 50% de mujeres y un 50% de hombres.
c) Limitar las políticas de igualdad al ámbito del empleo público y de la función pública.
d) Integrar el principio de igualdad en el ejercicio de sus competencias, promoviendo la eliminación de los obstáculos que impidan o dificulten su efectividad.

15. Según la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, para la designación del Justicia de Aragón será preciso inicialmente el voto favorable de:
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Tres quintas partes de los miembros de la Cámara.
d) Dos tercios de los miembros de la Cámara.

16. Los ingresos derivados de la explotación de un monte de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento son:
a) Tributos.
b) Ingresos patrimoniales.
c) Contribuciones especiales.
d) Precios públicos.

17. ¿Cuál de estos recursos NO es un tributo local?
a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) La Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.
c) La Contribución Especial por pavimentación de vías.
d) El Precio Público por entrada a la piscina municipal.

18. El Estatuto de Autonomía de Aragón tiene carácter de:
a) Ley ordinaria estatal.
b) **Ley Orgánica.**
c) Decreto Legislativo autonómico.
d) Reglamento de la Comunidad Autónoma.

19. Desde el punto de vista de su exigibilidad por las entidades locales, los impuestos municipales previstos en la legislación de Haciendas Locales se clasifican en:
a) Estatales, autonómicos y municipales.
b) **Obligatorios y potestativos.**
c) Ordinarios y extraordinarios.
d) Directos e indirectos.

20. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, cualquier orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo:
a) Solo se considera discriminatoria cuando la orden llega a producir un perjuicio efectivo.
b) Constituye discriminación únicamente cuando procede de una Administración Pública o de una empresa.
c) Se considera discriminatoria por razón de sexo, con independencia de que la conducta discriminatoria llegue a ejecutarse.
d) Solo podrá considerarse discriminatoria cuando exista una resolución judicial que así lo declare.

21. Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Indique cuál de los siguientes actos administrativos es nulo de pleno derecho:
a) Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de esta.
b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido.
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos necesarios para su adquisición.
d) Ninguno de los actos anteriores es nulo de pleno derecho.

22. El acto administrativo dictado por funcionario incurso en causa de abstención es:
a) Nulo.
b) Anulable.
c) Válido.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23. Según el artículo 27.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la cuestión de ilegalidad:
a) Se planteará cuando un Juez o Tribunal dicte una sentencia estimando un recurso directo contra una disposición administrativa de carácter general.
b) Se planteará por el Juez o Tribunal mediante auto una vez que sea firme la sentencia que estime un recurso indirecto contra una disposición administrativa de carácter general.
c) La sentencia que la resuelva afectará a la situación jurídica particular derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que la planteó.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

24. Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carece de los requisitos necesarios para su adquisición son:
a) Nulos de Pleno derecho.
b) Anulables.
c) Irregulares.
d) Nulos de pleno derecho o anulables.

25. Con carácter previo a la interposición de recurso contencioso-administrativo en los litigios entre administraciones públicas:
a) No cabe interponer recurso en vía administrativa.
b) Se debe presentar un requerimiento de carácter preceptivo.
c) No es posible ninguna actuación previa, debiendo presentarse directamente la demanda.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

26. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocerá:
a) De los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración.
b) De las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las administraciones públicas.
c) De los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, cualquiera que sea la naturaleza de dichos actos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27. Para que un acto pueda ser impugnado ante la Jurisdicción contencioso administrativa es imprescindible que:
a) Ponga fin a la vía administrativa.
b) Que sea definitivo en vía administrativa.
c) Que sea firme en vía administrativa.
d) Que sea expreso o presunto.

28. Entre los principios de buena regulación normativa que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas figura el de:
a) Seguridad jurídica.
b) Jerarquía normativa.
c) Publicidad de las normas.
d) Figuran todos los anteriores.

29. En ningún caso cabe recurso en vía administrativa:
a) Contra los actos de trámite.
b) Contra los actos firmes.
c) Contra las disposiciones de carácter general.
d) Contra ninguno de los anteriores.

30. Las Administraciones Públicas, cuando pretendan revisar un acto administrativo favorable para los interesados que sea anulable, deberán declararlo lesivo para el interés público, y posteriormente proceder a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Para poder declarar el acto lesivo es necesario:
a) Que no hayan transcurrido cinco años desde que se dictó el acto administrativo.
b) Que no hayan transcurrido tres años desde que se dictó el acto administrativo.
c) Que no hayan transcurrido dos años desde que se dictó el acto administrativo.
d) Que no hayan transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

31. No es un supuesto de nulidad de pleno derecho:
a) Acto dictado por órgano incompetente por razón de jerarquía.
b) Acto dictado prescindiendo de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
c) Acto lesivo de libertades susceptibles de amparo constitucional.
d) Reglamento que regula materias reservadas a la ley.

32. La delegación de competencias de los órganos administrativos:
a) Pierde su eficacia por el cambio del titular del órgano delegante.
b) No pierde su eficacia por el cambio del titular del órgano delegante.
c) Pierde su eficacia por el cambio del titular del órgano delegado.
d) Pierde su eficacia al año de la delegación.

33. Indique, de acuerdo con lo que señala el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO pondrá fin al procedimiento administrativo?:
a) La Resolución.
b) El Desistimiento.
c) La Renuncia.
d) La Suspensión.

34. Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre potestades regladas y discrecionales, según establece la normativa administrativa:
a) Las potestades discrecionales permiten elegir entre varias decisiones posibles dentro de los límites de la ley, mientras que las potestades regladas obligan a actuar según criterios previamente fijados.
b) Las potestades regladas permiten elegir entre varias decisiones posibles dentro de los límites de la ley, mientras que las potestades discrecionales obligan a actuar según criterios previamente fijados.
c) Las potestades discrecionales no se pueden ejercer en ninguna situación.
d) Las potestades discrecionales se pueden ejercer solamente en situaciones de emergencia y las regladas forman parte del procedimiento ordinario.

35. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado:
a) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos en los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la Administración no estará obligada a dictar resolución expresa posterior al vencimiento del plazo salvo que medie petición al respecto por parte del interesado.
c) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo no se podrán hacer valer ante las personas jurídicas privadas.
d) Para que la estimación por silencio administrativo tenga a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento, deberá recaer resolución expresa finalizadora del mismo.

36. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los medios de ejecución forzosa. Señale la respuesta INCORRECTA:

a) En la ejecución subsidiaria, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por si o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.

b) Para que las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, puedan proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, será necesario el apercibimiento previo.

c) En el procedimiento de apremio podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que estuviese establecida con arreglo a una norma de rango reglamentario.

d) Las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.

37. De conformidad con la regulación de las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, recogida en el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a) La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

b) Los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos serán indemnizables.

c) La indemnización procedente deberá abonarse en todo caso mediante un único pago.

d) Excepcionalmente, la Administración podrá fijar la cuantía de la indemnización sin necesidad de proceder a una valoración previa cuando circunstancias de urgencia en la reparación del daño así lo aconsejen.

38. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, indica, cuál de las siguientes opciones, no es uno de los principios generales de la actuación de los poderes públicos aragoneses:

a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.

b) El impulso de la colaboración y cooperación entre las Administraciones públicas aragonesas.

c) La protección de la maternidad, con independencia del modelo de familia.

d) La garantía de la efectividad del principio de igualdad de género en las relaciones entre particulares.

39. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces:

a) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar.

b) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.

c) Se tomará la fecha de la notificación electrónica siempre.
d) No se puede notificar por diversos cauces.

40. Respecto a la revisión en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) La resolución de los procedimientos de revisión de actos en vía administrativa requiere, en todo caso, de dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
b) Cuando el procedimiento se haya iniciado a instancia de parte interesada, transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución, el interesado podrá entender estimada la misma por silencio administrativo.
c) Podrá acordarse motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión de oficio formuladas por interesados cuando carezcan manifiestamente de fundamento.
d) La revisión de oficio únicamente procede respecto de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo.

41. El objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es:
a) Promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
b) Regular la jurisdicción laboral.
c) Establecer indemnizaciones por despido.
d) Crear un sistema de negociación colectiva.

42. La Prevención se entiende como:
a) Un documento obligatorio sin aplicación práctica.
b) Solo asistencia médica tras accidente.
c) Medidas y actividades adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad para evitar riesgos derivados del trabajo.
d) Un trámite optativo.

43. El deber de protección del empresario abarca:
a) Exclusivamente los accidentes graves.
b) La protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
c) Únicamente la entrega de EPIs.
d) La contratación de seguros privados.

44. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Salud, se aplica:
a) A las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores.
b) Únicamente a autónomos.
c) A todos los contratos mercantiles.
d) Exclusivamente a funcionarios públicos.

45. El empresario debe garantizar la formación preventiva:
a) De forma voluntaria.
b) Solo mediante folletos.
c) Teórica y práctica, suficiente y adecuada al puesto de trabajo.

d) Exclusivamente a mandos intermedios.

46. De los siguientes principios, recogidos en la regulación sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuál no se corresponde con la protección de datos:
a) Transparencia.
b) Deber de confidencialidad.
c) Exactitud de los datos.
d) Consentimiento de los menores de edad.

47. De los siguientes derechos que se indican, ¿cuáles puede ejercer el ciudadano en relación con la protección de sus datos personales, según establece la regulación en materia de Protección de Datos de Carácter Personal?:
a) Derechos de acceso, rectificación y portabilidad.
b) Derecho de participación.
c) Derechos de verificación, reactivación, ejecución y finalización.
d) Derechos de jurisdicción y exclusividad.

48. El Título II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos digitales, se denomina:
a) Principios de protección de datos.
b) Disposiciones generales.
c) Disposiciones aplicables a tratamientos concretos.
d) Derechos de las personas.

49. Conforme al artículo 5.1d) del Reglamento UE 2016/679, los datos serán (artículo 4 Ley Orgánica 5/2018):
a) Exactos y, en ningún caso, actualizados.
b) Aproximados y, si fuera necesario, actualizados.
c) Aproximados y, en ningún caso, actualizados.
d) Exactos y, si fuera necesario, actualizados.

50. ¿Cuál es el número máximo de ejercicios a los que se pueden aplicar los gastos plurianuales?
a) Dos ejercicios.
b) Tres ejercicios.
c) Cuatro ejercicios.
d) Cinco ejercicios.

51. ¿Cuál es el requisito indispensable para adquirir compromisos de gastos que se extiendan a ejercicios posteriores?
a) Que no exista crédito inicial en el año en curso.
b) Que lo autorice directamente el Jefe de servicio.
c) Que su ejecución se inicie en el propio ejercicio.
d) Que se aplique exclusivamente a gastos de personal.

52. ¿A qué se subordina la autorización o realización de gastos de carácter plurianual?
a) Autorización del Presidente.

b) Informe del/la Interventor/a.
c) Autorización del crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.
d) Aprobación del Pleno.

53. ¿Quién puede ampliar el número de anualidades y elevar los porcentajes en casos excepcionales?
a) El/la Tesorero/a.
b) El/la Interventor/a.
c) El Presidente.
d) El Pleno de la Corporación.

54. ¿A quién corresponde aprobar la liquidación del presupuesto?
a) Al/la Tesorero/a.
b) Al Presidente de la Entidad local.
c) Al Pleno de la Entidad local.
d) Al/la Interventor/a.

55. Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, conforme al artículo 27, de la Ley 39/2015, deberán:
a) Ser digitalizados sin requisitos adicionales.
b) Incluir los metadatos que acrediten su condición de copia.
c) Ser firmados en papel.
d) Tener exclusivamente formato en pdf.

56. Los documentos electrónicos deberán conservarse:
a) Hasta finalizar el procedimiento.
b) En formatos que garanticen su autenticidad, integridad y conservación.
c) Sólo en soporte papel.
d) Sin requisitos técnicos específicos.

57. La sede electrónica, según la Ley 40/2015, es:
a) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información pública.
b) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derechos Público en el ejercicio de sus competencias.
c) Es un sistema de firma electrónica.
d) Es el medio o soporte en el que se almacenan los documentos utilizados en actuaciones administrativas.

58. Según el artículo 1.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, dicha Ley garantizará de forma efectiva:
a) El derecho de participación en la planificación, elaboración y evaluación de las políticas públicas del Gobierno de Aragón, a través de mecanismos que promuevan un

diálogo abierto, transparente y regular, y de participación en la toma de decisiones en los asuntos que incidan directamente o indirectamente en el interés público.
b) El derecho a la información pública de forma accesible y comprensible, y a la veracidad y objetividad de esa información.
c) La transparencia de la actividad pública a través de las obligaciones de publicidad activa.
d) Todas las anteriores son correctas.

59. La obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que garantice la transparencia en la actividad pública, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, se corresponde con:
a) Participación ciudadana.
b) Apertura de datos.
c) Publicidad activa.
d) Gobierno abierto.

60. La obligación a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, se encuentra regulado en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en su:
a) Artículo 1.
b) Artículo 3.
c) Artículo 6.
d) Artículo 8.

61. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Públicos, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios, señale el incorrecto:
a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las no favorables al presunto infractor.
c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación.
d) Principio de culpabilidad.

62. Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se establece por:
a) Real Decreto del Consejo de Ministros.
b) Decreto del correspondiente Consejo de Gobierno.
c) Las correspondientes leyes de cada Administración Pública.
d) Ley estatal.

63. De acuerdo con el art. 93 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen disciplinario del personal laboral se rige:
a) En lo no previsto en el título VIII, por la legislación laboral.
b) En lo no previsto en el titulo VII, por la legislación laboral.
c) Exclusivamente por la legislación laboral.
d) En lo no previsto en el título VI, por la legislación laboral.

64. La especial dificultad técnica derivada del desempeño de un puesto de trabajo por parte de un funcionario se compensa retributivamente a través del:
a) El complemento de destino.
b) El complemento específico o el complemento de productividad, indistintamente.
c) El complemento de productividad.
d) El complemento específico.

65. Según lo dispuesto en el artículo 16 apartado c) del RDL 5/2015, el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior se denomina:
a) Promoción interna vertical.
b) Promoción interna horizontal.
c) Carrera horizontal.
d) Carrera vertical.

66. Según el TREBEP, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva las materias siguientes:
a) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y a la promoción profesional.
b) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.
c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.

67. Se entiende por crédito disponible:
a) La diferencia entre el crédito total y el crédito retenido.
b) La diferencia entre el crédito total y los gastos aprobados.
c) La diferencia entre el crédito inicial y los gastos comprometidos.
d) El crédito presupuestario.

68. El presupuesto de las entidades locales será formado por su Presidente y a él habrá de unirse varia documentación conforme a lo dispuesto en el artículo:
a) Art. 166.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
b) Art. 193.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
c) Art. 167.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
d) Art. 168.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

69. Las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos comprenderán: (SELECCIONE LA INCORRECTA)
a) El Balance.
b) La cuenta del resultado económico- financiero.
c) El estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El estado de flujos de efectivo.

70. Tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, según lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
a) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases estructurales de tesorería.
b) Las emisiones de deuda por plazo no superior a 18 meses.
c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.
d) Las respuestas a) y c) con correctas.

71. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 167.3.c dispone:
a) La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al concepto, el segundo al artículo y el tercero al capítulo.
b) La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al artículo el tercero al concepto.
c) La clasificación económica constará de dos niveles, el primero relativo al capítulo y el segundo al artículo.
d) La clasificación económica constará de tres niveles, el primero relativo al capítulo, el segundo al concepto y el tercero al artículo.

72. De acuerdo con el artículo 177 TRLRHL, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito, el presidente de la corporación ordenará la incoación de un expediente de:
a) Crédito extraordinario.
b) Suplemento de crédito.
c) Generación de crédito.
d) Transferencia de crédito.

73. Competencias en materia de gestión de gastos, selecciona la afirmación correcta:
a) Dentro del importe de los créditos autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los gastos al presidente.
b) Corresponderá al presidente de la corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos.
c) Corresponderá al presidente o al pleno de la corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

74. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 67 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la edad de jubilación forzosa de los funcionarios:
a) Se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.
b) Será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad, para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad.
c) Se declarará siempre a solicitud del interesado.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

75. De conformidad con el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo:
a) Contribuir a la consecución de la eficiencia en la prestación de los servicios y de la eficacia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
b) Contribuir a la consecución de la eficiencia en la prestación de los servicios y de la eficacia en la asignación presupuestaria, mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
c) Contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus recursos humanos, su mejor planificación, formación, promoción profesional y movilidad.
d) Ninguna es correcta.

76. El funcionario declarado en la situación de suspensión regulada en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional.
b) Perderá el puesto de trabajo cuando la suspensión exceda de doce meses.
c) No podrá prestar servicios únicamente en su Administración de origen.
d) La suspensión de funciones no puede provocar la pérdida del puesto de trabajo.

77. Según el artículo 205 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale la respuesta incorrecta respecto a los fines de la contabilidad pública local:
a) Determinar los resultados analíticos poniendo de manifiesto el coste y rendimiento de los servicios.
b) Facilitar los datos y demás antecedentes que sean precisos para la confección de las cuentas económicas del sector público y las nacionales de España.
c) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficiencia.
d) Determinar los resultados desde un punto de vista económico-patrimonial.

78. ¿Cuál de las siguientes sanciones puede imponerse por razón de las faltas cometidas, según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?

a) Cualquier otra que se establezca en los convenios Colectivos.

b) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.

c) Únicamente se pueden imponer las recogidas expresamente en el TREBEP.

d) Cualquier otra que se establezca por Ley.

79. Los gastos corrientes se recogen en:

a) Los capítulos 1 a 6.

b) Los capítulos 6 y 7.

c) Los capítulos 8 y 9.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

80. De acuerdo con el artículo 202 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el ejercicio contable coincidirá:

a) Con el periodo tributario.

b) Con el programa plurianual.

c) Con el plan financiero.

d) Con el ejercicio presupuestario.

81. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en su artículo 1.1 que la citada Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de:

a) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una deficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

b) **Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.**

c) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda del monopolio y la selección de la oferta económicamente menos ventajosa.

d) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto,

y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la mejor relación calidad-precio.

82. El artículo 84.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:
a) **Ordenanzas y bandos.**
b) Sometimiento a control anterior y posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
c) Órdenes generales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
d) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la no ejecución de un acto o la no prohibición del mismo.

83. Son servicios públicos locales, según el artículo 85.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) Los que presta el Estado, a través de las entidades locales, en el ámbito de sus competencias.
b) Los que prestan las Comunidad Autónomas, a través de las entidades locales, en el ámbito de sus competencias.
c) Los que prestan las instituciones europeas, a través de las entidades locales, en el ámbito de sus competencias.
d) **Los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias.**

84. De conformidad con lo regulado en el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
a) Gestión directa por una Comunidad Autónoma.
b) Gestión directa por un Organismo autónomo estatal.
c) **Gestión directa por una Entidad pública empresarial local.**
d) Gestión indirecta por una Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

85. Las entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de las siguientes prerrogativas, según el artículo 82 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) **La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de un año, los patrimoniales.**
b) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de dos años, los patrimoniales.
c) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de cinco años, los patrimoniales.
d) La de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de diez años, los patrimoniales.

86. "El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan" como así establece el artículo:
a) 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) **79.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.**
c) 89.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
d) 99.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

87. Según el artículo 82 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales gozan, respecto de sus bienes, de la siguiente prerrogativa:
a) La de amojonamiento, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislación de los montes.
b) La de limpieza de montes, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislación de los montes.
c) **La de deslinde, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislación de los montes.**
d) La de realizar cortafuegos para evitar incendios forestales, que se ajustará a lo dispuesto en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislación de los montes.

88. De acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
a) El contrato de concesión de servicios es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
b) **El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.**
c) El contrato de concesión de servicios es aquel cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

89. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de acuerdo con su artículo 17 establece en relación con los contratos de servicios que:
a) Podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
b) Únicamente cuando lo determine el pliego, podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
c) **No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.**

d) Excepcionalmente podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, si se establece así en los pliegos.

90. De acuerdo con el artículo 62.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) **Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.**

b) Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

c) Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación valorarán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

d) Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación negociarán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

91. El artículo 106.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un:

a) 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.

b) **3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.**

c) 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.

d) 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.

92. El artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se titula "Procedimiento de adjudicación", dentro del mismo se establece que:

a) Los contratos menores no podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.
b) **La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.**
c) En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 130.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

93. El artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público indica expresamente que salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos:
a) En el 5 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 5 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
b) En el 10 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 10 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
c) En el 15 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 15 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
d) En el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.

94. Dentro del Capítulo titulado "Del procedimiento de gestión y justificación de la subvención pública", y en concreto de conformidad con lo indicado en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, indique la afirmación correcta:
a) **El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada.**
b) El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros podrá exceder del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que

tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que exceda del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada.
c) El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe de la actividad subvencionada.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

95. El artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones relativo a la "invalidez de la resolución de concesión", dentro del Titulo relativo al "Reintegro" indica lo siguiente:
a) La declaración judicial o administrativa de invalidez llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
b) La declaración judicial o administrativa de anulabilidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
c) **La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.**
d) La declaración judicial o administrativa de inexistencia llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

96. En el artículo 39.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece, en relación con el reintegro de las subvenciones, que:
a) Prescribirá a los tres años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.
b) Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.
c) Prescribirá a los cinco años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

97. El Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón determina en su artículo 9 que, además de lo establecido en la normativa básica estatal, las personas beneficiarias vendrán obligadas a:
a) Cuando la beneficiaria de una subvención sea una entidad local, esta debe acreditar estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, debe haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.
b) Comunicar al órgano concedente cualquier circunstancia que provoque una modificación en los términos de la actuación subvencionada, en el plazo de dos meses desde que se produjo la modificación.
c) Acreditar el efectivo incumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le hayan sido concedidas con posterioridad para un mismo destino y finalidad en ejercicios anteriores por alguno de los sujetos comprendidos en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de esta Ley, aunque se trate de

diferentes fases o aspectos de un mismo proyecto. La convocatoria establecerá la forma de acreditación.
d) Cuando la beneficiaria de una subvención sea una Comunidad Autónoma, esta debe acreditar estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, debe haber adoptado medidas de racionalización del gasto y debe haber presentado planes económico-financieros, en el caso de que sus cuentas presenten desequilibrios o acumulen deudas con proveedores.

98. El artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece expresamente que:
a) Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 10 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 50.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-Que el contrato se celebre por escrito.
-Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.
b) Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-Que el contrato se celebre por escrito.
-Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.
c) Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 30 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 80.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-Que el contrato se celebre por escrito.
-Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.
d) Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 40 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 100.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
-Que el contrato se celebre por escrito.
-Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras.

99. La Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza, de acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de las subvenciones otorgadas:
a) Por la Diputación Provincial de Zaragoza única y exclusivamente.
b) **Por la Diputación Provincial de Zaragoza y sus organismos autónomos dependientes Institución Fernando el Católico.**
c) Por la Diputación Provincial de Zaragoza y sus organismos autónomos dependientes Institución Fernando el Católico y la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli.
d) Por la Diputación Provincial de Zaragoza y sus organismos autónomos dependientes Institución Fernando el Católico, la Ciudad Escolar Ramón Pignatelli y la Fundación Joaquina Zamora.

100. El artículo 2.5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza establece que de conformidad con lo previsto en la normativa

básica estatal reguladora de las subvenciones públicas, en aquellas que conceda la Diputación Provincial en funciones de asistencia y cooperación municipal, se excluye la aplicación de los siguientes requisitos:

a) En el caso de adquisición de bienes inscribibles en un registro público cuando estos vayan a tener la calificación de bienes de dominio público, no será necesario hacerse constar en la escritura la afectación a su destino, así como el importe de la subvención concedida, ni la inscripción de estos extremos en el registro público correspondiente, sin perjuicio de la obligación de destinar los bienes al fin concreto para el cual se concedió la subvención al menos durante dos años.

b) En el supuesto de adquisición de bienes muebles, el certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial, podrá ser sustituido por informe pericial emitido por personal municipal competente o por profesionales contratados al servicio del Ayuntamiento con titulación suficiente que les capacite para esa finalidad.

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro, salvo que una norma específica lo exija y sin perjuicio de la facultad de compensación de deudas entre las entidades locales y la Diputación Provincial de Zaragoza.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

SEGUNDO.- Hacer público el cuestionario de preguntas y respuestas del segundo ejercicio de la oposición:

Supuesto práctico nº 1

El Ayuntamiento de XX, perteneciente a la provincia de Zaragoza, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Régimen Local, tiene la obligación de prestar, entre otros servicios, los de recogida de residuos y de limpieza viaria.

Durante el vigente ejercicio 2026, el Ayuntamiento ha realizado diversas actuaciones, con el fin de mejorar la recogida de residuos. Ello conlleva, que a fecha de octubre de 2026, la partida destinada a la recogida de residuos, perteneciente al Capítulo II del presupuesto, se encuentra con un saldo de 1.000,00 euros.

Sin embargo, la avería de uno de los camiones de recogida de basura, supone un coste para el Ayuntamiento de XX, de 25.000,00 euros. Además se da la circunstancia, que no existen otras partidas desde las cuales se pueda efectuar una transferencia de crédito para atender dicho gasto.

1. La actuación que se le plantea tramitar para dotar de crédito a la partida indicada, es un Suplemento de Crédito. Para ello, se deben dar una serie de condiciones/requisitos, de los que se relacionan a continuación. Indique cuál es la respuesta correcta:

a) El gasto no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente.

b) Exista la partida.

c) El crédito consignado en la partida no es suficiente.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. La competencia para la ordenar la incoación de un expediente de Suplemento de Crédito, corresponde:
a) Al responsable del Servicio que requiere el crédito.
b) A la Intervención General.
c) Al Presidente/Alcalde de la Corporación.
d) Al Pleno de la Corporación.

3. El expediente de Suplemento de Crédito, debe especificar una información concreta para su correcta tramitación, indique la respuesta correcta:
a) Debe especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar.
b) Debe especificar el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
c) La respuesta a) y b) son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta.

4. De acuerdo con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 169 de la misma; el acuerdo de suplemento de crédito, deberá publicarse:
a) En el Boletín Oficial del Estado.
b) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
d) En el Bando municipal.

5. El aumento de la partida dotada a través del suplemento de crédito, deberá financiarse mediante alguno de los siguientes recursos. Indique la respuesta correcta:
a) Con cargo a remanente líquido de tesorería.
b) Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas.
d) Todas las anteriores son correctas.

Supuesto práctico nº 2

La Excma. Diputación Provincial aprueba una convocatoria ordinaria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinada a clubes deportivos de la provincia para financiar actividades realizadas durante la temporada. Se trata de una subvención pospagable. En ella se establecen los siguientes plazos límite:

- Fin de plazo de presentación de solicitudes: 15 de abril.
- Fin de plazo de presentación de la documentación justificativa: 30 de octubre.

Durante el procedimiento se producen los siguientes hechos:

1. El *Club Ciclista "El Roble"*, entidad con personalidad jurídica, presenta su solicitud el 10 de abril de manera presencial en el Registro General de la Diputación, en soporte papel y firmada electrónicamente por su Presidente.
2. Tras la resolución definitiva de concesión por importe de 5.000 €, el *Club Natación "Furnas"* presenta la documentación justificativa el 3 de noviembre.
3. El *Club de Montaña "Valle Alto"* presenta en plazo la justificación acreditando un 85% del gasto total proyectado, habiendo cumplido íntegramente el objeto y la actividad deportiva programada.

4. El *Club Deportivo Elemental "Dique"* a fecha 30 de octubre, no ha presentado la justificación. Tras recibir el requerimiento del Art. 70.3 del RGS, presenta la cuenta justificativa incluyendo facturas de fechas 10, 15 y 17 de octubre, pagadas respectivamente el 13 de octubre, 17 de octubre y 3 de noviembre.
5. El *Club de Pádel "Nordeste"* presenta el 12 de abril, adjunta a su instancia de solicitud de subvención, la cuenta justificativa completa con las facturas y pagos de la temporada.

6. Respecto a la solicitud registrada por el Presidente del *Club Ciclista "El Roble"*, ¿cuál es la actuación que debe realizar la Administración?
a) Admitirla a trámite como válida, ya que la firma electrónica del Presidente acredita la identidad del solicitante y fue entregada en plazo en el registro de la Diputación.
b) Requerir la subsanación a través de su presentación electrónica, teniéndose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que se efectúe dicha subsanación.
c) Inadmitirla de plano sin posibilidad de subsanación, al viciar de nulidad absoluta el uso del soporte papel.
d) Requerir al club para que en un plazo de 10 días realice la subsanación por medios electrónicos, manteniendo como fecha de solicitud la de su presentación inicial en el Registro presencial.

7. Habida cuenta de que el *Club Natación "Furnas"* presenta la documentación justificativa el 3 de noviembre, ¿cómo debe actuar la Diputación Provincial?
a) Se admitirá a trámite la documentación y se procederá al abono si la justificación es correcta, sin perjuicio de que la presentación fuera de plazo constituya una infracción leve.
b) Procede declarar la pérdida del derecho al cobro de forma directa y la denegación del pago por extemporaneidad.
c) La presentación extemporánea voluntaria exime de cualquier tipo de infracción y obliga al abono íntegro si la justificación es correcta.
d) Se incoará de oficio un procedimiento sancionador por infracción grave con revocación automática del acto de concesión.

8. El *Club de Montaña "Valle Alto"* ha justificado un 85% del presupuesto de la actividad cumpliendo íntegramente los objetivos deportivos. ¿Cómo debe proceder la Diputación respecto al pago?
a) Declarar la pérdida total del derecho al cobro, al no haber alcanzado la justificación del 100% del gasto proyectado.
b) Liquidar la subvención aplicando el principio de proporcionalidad, reduciendo la cuantía a abonar en la misma proporción que el gasto no justificado.
c) Abonar la totalidad del importe concedido al haberse cumplido el objeto deportivo proyectado.
d) Iniciar un procedimiento de reintegro por la cuantía equivalente al 15% no ejecutado.

9. El *Club Deportivo Elemental "Dique"* aporta tras el requerimiento del Art. 70.3 del RGS, facturas de octubre con pagos efectuados el 13 de octubre, 17 de octubre y 3 de noviembre. ¿Qué consideración jurídica tienen dichos gastos?
a) Serán admitidos en su totalidad, ya que el plazo improrrogable de 15 días concedido en el requerimiento amplía la fecha límite para realizar los pagos.

b) Solo serán subvencionables los gastos cuyas facturas y pagos se hayan realizado dentro del período habilitado de ejecución y pago, quedando excluido el pago del 3 de noviembre.
c) La inclusión de un pago realizado el 3 de noviembre invalida la totalidad de la cuenta justificativa, causando la pérdida total del derecho al cobro.
d) Se abonará la totalidad de la subvención aplicando una penalización del 10%.

10. El *Club de Pádel "Nordeste"* presenta el 12 de abril, adjunta a su instancia de solicitud de subvención, la cuenta justificativa completa con las facturas y pagos de la temporada. ¿Cómo debe la Diputación actuar ante este hecho?
a) Inadmitir la solicitud de concesión de la subvención por vulnerar la separación de fases del procedimiento de concurrencia competitiva.
b) Admitir a trámite la solicitud de subvención por haberse presentado dentro del plazo establecido, pero tener por no presentada la cuenta justificativa a efectos de su fiscalización, al carecer la entidad en ese momento de la condición de beneficiaria.
c) Dar por cumplida la obligación de justificación bajo la condición suspensiva de que la entidad resulte adjudicataria en la resolución definitiva de concesión.
d) Requerir a la entidad para que subsane la solicitud en un plazo de 10 días retirando los documentos justificativos, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su solicitud de concesión.

Supuesto práctico nº 3

El día 2 de agosto de 2024 el Sr. Pérez sufre un accidente en la carretera CV 633 titularidad de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) debido a un bache de grandes dimensiones no señalizado, sufriendo un esguince cervical y daños materiales en su vehículo matriculado el 1 de agosto de 2024. Transcurrido el tiempo y una vez recuperado del esguince sufrido, el afectado decide iniciar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la administración provincial, presentando a través de registro electrónico una solicitud el 30 de julio de 2025, incorporando a la misma informe médico y la factura del taller, siendo la cuantía total reclamada de 25.000,00 euros.

11. La DPZ tiene conocimiento del accidente sufrido por el Sr. Pérez y decide, sin esperar a que el Sr. Pérez presente reclamación, iniciar un procedimiento de oficio. ¿Puede hacerlo?
a) Sí que puede iniciarlo, se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo: el procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.
b) Sí que puede iniciarlo, se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo: el procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

c) Sí que puede iniciarlo, se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo, si no se personarán el procedimiento se entenderá caducado.
d) Sí que puede iniciarlo, se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo, si no se personaran el procedimiento se entenderá caducado.

12. El Sr. Pérez, a quien no se le ha comunicado la iniciación del procedimiento de oficio, decide presentar una solicitud reclamando 25.000 euros, ¿qué requisitos deberá contener la mencionada solicitud?:
a) Además de lo previsto en el artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.
b) Además de lo previsto en el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.
c) Además de lo previsto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.
d) Además de lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

13. El 1 de marzo de 2026 el solicitante al no obtener respuesta a su solicitud decide presentar un escrito solicitando los efectos del silencio para poder interponer recurso. Transcurrido el mes de marzo sin obtener respuesta, el día 2 de abril de 2026 decide presentar recurso de alzada ante el pleno de la corporación.

a) El recurso de alzada será inadmitido a trámite, según el art 114 e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive pone fin a la vía administrativa.

b) El recurso de alzada será desestimado por no existir resolución expresa.

c) El recurso de alzada será inadmitido a trámite por no existir resolución expresa.

d) El recurso será admitido a trámite como recurso de reposición.

14. En fecha 30 de abril de 2026 el solicitante recibe la notificación de la resolución del recurso de alzada interpuesto, no estando conforme, el reclamante decide acudir a los Tribunales ¿Ante qué órgano jurisdiccional debe interponerse el recurso contencioso-administrativo frente a la resolución del recurso de la reclamación patrimonial?

a) No puede interponer recurso contencioso-administrativo puesto que no se ha agotado la vía administrativa.

b) Puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón hasta el 30 de junio de 2026.

c) Puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de instancia hasta el 30 de julio de 2026.

d) Puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de instancia hasta el 30 de junio de 2026.

15. Si el órgano judicial competente desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto ¿puede el Sr. Pérez presentar algún otro recurso?

a) Sí, Recurso de apelación ante el Tribunal Supremo.

b) Sí, Recurso de casación ordinario ante la Audiencia Nacional.

c) En principio no cabe recurso ordinario de apelación al ser dictada en única instancia por razón de la cuantía, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que procedan.

d) Cabe interponer recurso ordinario de apelación ante la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de justicia de Aragón.

Supuesto práctico nº 4

Don Roberto Vázquez y Doña Carmen Vaquero son empleados públicos de la Diputación Provincial de Zaragoza en la actualidad. Ambos trabajan como administrativos en el Servicio de Recursos Humanos y realizan tareas administrativas, normalmente de trámite y colaboración.

Por un lado, Don Roberto es funcionario interino nombrado en ejecución de un programa temporal de carácter temporal, que tiene una duración de cinco años. Una vez pasado un año, la Diputación le propone ocupar un puesto de personal eventual denominado "Asesor Administrativo".

Por otro lado, Doña Carmen es funcionaria interina nombrada por exceso o acumulación de tareas por un plazo de nueve meses, dentro de un periodo de

dieciocho meses. Una vez realizadas las elecciones sindicales en la Diputación, Doña Carmen es nombrada como miembro de la Junta de Personal de la Diputación Provincial por un periodo de cinco años sin posibilidad de ser reelegida. A los dos meses de su nombramiento, se le abre un expediente disciplinario por un notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. Una vez pasado cuatro meses de trabajo, Doña Carmen aprueba una oposición de una plaza de Administrativo de la Diputación.

16. De acuerdo con el artículo 10.1 c) y d) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), ¿son conformes a la citada norma la duración de los nombramientos de Don Roberto y Doña Carmen?

a) El nombramiento de Don Roberto es conforme ya que el LEBEP permite que un programa temporal tenga una duración de cuatro años ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, y el de Doña Carmen también es conforme ya que el LEBEP permite una acumulación de tareas por un plazo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

b) El nombramiento de Don Roberto es conforme ya que el LEBEP permite que un programa temporal tenga una duración de tres años ampliable hasta veinticuatro meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, y el de Doña Carmen no es conforme ya que el LEBEP permite una acumulación de tareas por un plazo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.

c) El nombramiento de Don Roberto no es conforme ya que el LEBEP no permite que un programa temporal tenga una duración superior a cuatro años ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, y el de Doña Carmen tampoco es conforme ya que el LEBEP no permite una acumulación de tareas de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

d) **El nombramiento de Don Roberto no es conforme ya que el LEBEP no permite que un programa temporal tenga una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, y el de Doña Carmen es conforme ya que el LEBEP permite una acumulación de tareas de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.**

17. De conformidad con el artículo 12.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), ¿Qué régimen se le aplicaría a Don Roberto si ocupase el puesto de personal eventual que le proponen?

a) Al personal eventual le es aplicable el régimen especial para puestos de confianza o asesoramiento especial.

b) **Al personal eventual le es aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.**

c) Al personal eventual le es aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios interinos.

d) Al personal eventual le es aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen especial de los funcionarios interinos.

18. Según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público (LEBEP), ¿Es correcto el nombramiento de Doña Carmen como miembro de la Junta de Personal de la Diputación Provincial por un periodo de cinco años sin posibilidad de ser reelegida?

a) Sí, puesto que el mandato de los miembros de las Juntas de Personal será como máximo de cinco años, sin posibilidad de ser reelegida.

b) No, puesto que el mandato de los miembros de las Juntas de Personal será de cuatro años, sin posibilidad de ser reelegida.

c) **No, puesto que el mandato de los miembros de las Juntas de Personal será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.**

d) No, puesto que el mandato de los miembros de las Juntas de Personal será de cinco años, pudiendo ser reelegidos.

19. Conforme al artículo 62.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP) ¿Cuál es el orden de los siguientes requisitos para que Doña Carmen adquiera la condición de funcionaria de carrera de la plaza de Administrativa que acaba de aprobar?

a) **Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.**

b) Superación del proceso selectivo. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

c) Superación del proceso selectivo. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.

d) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Superación del proceso selectivo. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.

20. Según el artículo 95.2 g) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), ¿Qué falta disciplinaria ha cometido Doña Carmen según el LEBEP para que se le inicie un expediente disciplinario?

a) **Una falta disciplinaria muy grave.**

b) Una falta disciplinaria grave.

c) Una falta disciplinaria leve.

d) Un delito disciplinario.

TERCERO.- Conceder un plazo excepcional de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zaragoza para las alegaciones que, en su caso, se formulen contra las preguntas y/o respuestas del cuestionario del primer y segundo ejercicio de la oposición.

Dichas solicitudes deberán ser por escrito a través del Registro General de Entradas de esta Diputación. En caso de que se realice por procedimiento administrativo, deberán remitir, dentro del plazo concedido, copia de dicha solicitud al siguiente correo electrónico: personalseleccion@dpz.es

Zaragoza, a 14 de septiembre de 2026.

El Secretario del Tribunal,



Fdo: César García Cambra